

**Santiago, siete de marzo de dos mil veintidós.**

A los folios 21 y 23: téngase presente.

**Vistos y oídos los intervinientes:**

En estos autos RUC 1901143896-5 y RIT O-62-2021 del Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, por sentencia de 29 de octubre de 2021, dictada por los jueces señor Jose Santos Pérez Anker, señor Héctor Plaza Vásquez y señora Colomba Guerrero Rosen, se condenó a **ALEXIS ENRIQUE CONTRERAS ULLOA**, sargento 2° de Carabineros y a **FELIPE ANDRES CIFUENTES ABURTO**, cabo 1° de Carabineros a sufrir, cada uno, la pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo; a las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena; por su responsabilidad como autores del delito consumado previsto y sancionado en el artículo 150 A del Código Penal, concurriendo la hipótesis del artículo 150 C del mismo cuerpo normativo, perpetrado con fecha 21 de octubre de 2019, en la comuna de La Florida.

En contra de esta sentencia se alzaron las defensas de ambos acusados, quienes interpusieron sendos recursos de nulidad. Declarados admisibles por esta Corte los recursos de nulidad se procedió a la vista del recurso el 16 de febrero de 2022, oportunidad en que alegaron ante esta Corte tanto los recurrentes como el representante del Ministerio Público y la representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

**Considerando:**

**I.- En cuanto al recurso de nulidad del sentenciado Alexis Enrique Contreras Ulloa.**

**Primero:** Que, el defensor penal privado, abogado Jorge Martinez Cornejo en representación del imputado Alexis Enrique Contreras Ulloa dedujo recurso de nulidad en contra de esta sentencia fundado en la causal prevista en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal solicitando la nulidad de la sentencia recurrida y se dicte -conforme a lo previsto en el artículo 385 del mismo código- una de reemplazo en la que, se condene a su representado, como autor del delito de apremios ilegítimos, a la pena de 301 días de presidio menor en su grado mínimo.

En el recurso se sostiene que los sentenciadores al calificar jurídicamente -como tortura- aquellos hechos establecidos en el considerando séptimo de la sentencia habrían hecho una errónea aplicación del Derecho que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo recurrido. **Segundo:** Que, luego, indica los hechos por los que se acusó a su defendido, refieren que: *“El 21 de octubre*



de 2019, siendo aproximadamente las 20:30 horas, encontrándose vigente el estado de excepción constitucional y toque de queda decretado para ese día a las 20:00 horas, la víctima, el adolescente Benjamín Alonso Pinochet Ortiz de 16 años, se desplazaba por calle Walker Martínez a la altura de calle Alicahue de la comuna de La Florida, siendo abordado por funcionarios de seguridad municipal quienes en ese momento reciben información que el adolescente habría participado en un delito de robo, señalándole que se tirara al piso, para luego esposarlo, comunicándose en forma inmediata con carabineros quienes llegaron al lugar, siendo entregado el menor a los funcionarios públicos, Sargento 2° Alexis Contreras Ulloa y Cabo 1° Felipe Cifuentes Aburto.

“Los funcionarios ya individualizados, encontrándose el adolescente bajo su custodia y privado de libertad, comienzan a exigirle que les señalara el lugar en que se encontraban los computadores robados, respondiendo la víctima que no sabía de qué hablaban, ante lo cual ambos carabineros comienzan a golpearlo reiteradamente con sus bastones de servicio, en distintas partes del cuerpo, especialmente en la zona de la espalda, piernas y cabeza, al tiempo que continuaban exigiéndole que les indicara que donde había dejado los computadores robados, mientras la víctima les gritaba pidiéndole que dejaran de golpearlo, manteniéndose esta agresión por un lapso superior a 5 minutos, siendo luego trasladado el adolescente a la unidad policial.”

“A consecuencia de lo anterior la víctima Benjamín Pinochet Ortiz, resulta con lesiones visibles en la zona de la espalda, brazos, labio y muslos, siendo calificadas como leves, de acuerdo con lo informado por el Servicio Médico Legal, en su Informe N° 3576-2019 de fecha 28 de noviembre de 2019”. **Tercero:** Que, el tribunal del fondo, en su considerando séptimo estableció que, “tal como se desprende de las alegaciones de apertura y de clausura, que no hubo discusión respecto de los hechos sucedidos y que fueron objeto de la acusación; si no que, únicamente, se controvertió o fue objeto de discusión la calificación jurídica de esos hechos, esto es, si correspondían a la subsunción de lo previsto en el artículo 150 A o al artículo 150 D, o lesiones leves, o alguna otra hipótesis prevista en el Código de Justicia Militar, en virtud de las lesiones que presento y secuelas no permanentes ni definitivas que con que quedo”. En consecuencia, los hechos contenidos en la acusación corresponden a los hechos acreditados en el juicio.

**Cuarto:** Que, el recurrente estima que a partir de los hechos acreditados por el Tribunal a quo en su fundamento séptimo, estos son constitutivos del delito de apremios ilegítimos y no el delito de torturas, para ello ahonda latamente sobre la historia de la Ley N°20.968 que modificó el Código Penal en su Título III, que



trata de los crímenes y simple delitos que afectan los derechos garantizados por la Constitución, que en su párrafo 4.- trata de aquellos delitos relativos a los agravios inferidos por los funcionarios públicos sobre los derechos ya citados; de la Ley N° 19.567, relacionando ambos textos normativos con la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de 10 de diciembre de 1984, suscrito por Chile el año 1987, conocida también como Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura o UNCAT, por sus siglas en inglés “*United Nations Convention against Torture.*”

*Razona el recurrente que la interpretación que le han dado los Estados miembros de la UNCAT y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al concepto de tortura, es que, la tortura sólo se sanciona como delito ante afectaciones graves, permanentes, profundas, severas, respecto a afectaciones físicas o psíquicas de una persona provocadas por la conducta del funcionario que infringe dolores o sufrimientos a la víctima.*

De hecho, cita al profesor Héctor Hernández, que en su artículo denominado “La tortura en el derecho penal chileno y el riesgo de su banalización”, ante la falta de elementos distintivos entre el delito de tortura y el ilícito de apremios ilegítimos, expresa que: “*La ley ha dejado a quien debe aplicarla en una situación simplemente insostenible, en la cual lo que cabe es, o bien, una aplicación exclusivamente intuitiva de la distinción, o la adhesión a un criterio racional de distinción, a pesar de que este se vea desautorizado por el sistema de la ley. Aquí se entiende que la segunda es la actitud mas responsable, concretamente de acuerdo con un criterio centrado en la gravedad del trato, afirmandose la presencia de tortura solo en supuestos indiscutibles bajo cualquier jurisdicción internacional, de este modo debería apreciarse tortura en la aplicación de electricidad, en los colgamientos, en las distintas formas de sofocamiento, en las mutilaciones o extracción de uñas o dientes, en la violación y otras formas graves de agresión sexual, en las quemaduras, en la práctica de golpizas graves y prolongadas, y en otras conductas equivalentes en cuanto a irrogación de dolor, aunque no dejen marcas ni secuelas físicas, así como reconocerse tortura psicológica en situaciones equivalentes a los simulacros de ejecución o en el forzamiento a presenciar la tortura o asesinato de otro. También debería apreciarse tortura, para los efectos del inciso 4 del artículo 150 letra A, en la administración de sustancias que alteran la conciencia o voluntad de la persona. Más allá de esos límites habría solo apremios ilegítimos u otros tratos con una pena, es bueno recordarlo, de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo si la víctima esta sometida( artículo 150 letra D inciso 2), es decir, la misma pena del caso más grave del antiguo tipo de tortura*



*del artículo 150 A, y con una pena algo menor en supuestos ( los de víctima no sometida) que antes de la ley de 2016 simplemente no eran objeto de un tipo penal específico de funcionarios)”(la cursiva y destacados son del recurrente).*

**Quinto:** Que, agrega sobre el tipo penal de tortura conforme a lo dispuesto en el artículo 150 letra A del Código Penal, que este requiere para su correcta interpretación, la aplicación estricta de sus elementos descriptivos, normativos, subjetivos en cuanto a la presencia del dolo, lo que la sentencia erroneamente no hace en su considerando séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo, arribando a un error de derecho en su parte resolutive, provocando un agravio para el acusado Alexis Contreras Ulloa, pues se calificó erroneamente su conducta y el reproche penal que se le hace bajo la figura más grave del ordenamiento penal chileno, el delito de Tortura del artículo 150 letra A), en circunstancias que no obstante, haber reconocido voluntariamente su participación, lo único que era procedente para los sentenciadores era aplicar correctamente la ley y recalificando el hecho, subsumiendo la conducta en un tipo penal diverso, provocándose entonces un concurso aparente de leyes penales, entre el delito de apremios ilegítimos simple del artículo 150 letra D,) y el tipo especial de violencias innecesarias del artículo 330 del Código de Justicia Militar, y que por aplicación del principio de alternatividad debía calificarse el hecho en el delito del artículo 150 letra D), imponiéndose la pena señalada a este hecho, y no la que se impuso de cuatro años de presidio efectivo, debiendo además acogerse a los menos tres o más de las cinco atenuantes que se hicieron valer en favor del acusado, otorgándole los beneficios de la ley 18.216, con las penas accesorias sin la aplicación del artículo 17 de la ley 19.970 y su reglamento, al incurrir en este error el tribunal provoco un agravio al sentenciado, sólo reparable con la anulación del fallo del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal y la dictación de una sentencia de reemplazo que califique los hechos como apremios ilegítimos del artículo 150 D del Código Penal y acoja las minorantes de responsabilidad penal alegadas.

## **II.- En cuanto al recurso de nulidad del sentenciado Felipe Andrés Cifuentes Aburto.**

**Sexto:** Que, el defensor penal privado, abogado René González Nieto por el encartado Felipe Andrés Cifuentes Aburto, interpone recurso de invalidación fundado en las siguientes causales:

- a) Como causal principal señala la prevista en el artículo 373, letra a), del Código Procesal Penal, toda vez que durante la tramitación del juicio se han infringido sustancialmente garantías constitucionales, en particular el debido proceso,
- b) en subsidio, nuevamente la causal del artículo letra a), del Código Procesal Penal, por infracción de las garantías aseguradas por la Constitución, en especial



el debido proceso, toda vez, que en la Sentencia de autos no existe el “Considerando Decimo Segundo”, que colma el “Considerando Decimo”, de la Sentencia del cargo,

c) luego, subsidiariamente alega la causal contemplada en el artículo 373 letra b), del Código Procesal Penal, basada *en que en el pronunciamiento de la sentencia, se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo,*

d) En cuarto lugar y también en subsidio de las causales anteriores, invoca la prevista en el artículo 374, letra c), del Código Procesal Penal, al haberse omitido en la sentencia los requisitos de las letras c) y d) del artículo 342, del mismo cuerpo legal(sic); y

e) Por último, como quinta causal, en subsidio de las causales anteriores, deduce el motivo de nulidad del artículo 374, letra e) del Código Procesal Penal, al haberse omitido en la sentencia el requisito de la letra c) del artículo 342, del mismo cuerpo legal.

**Séptimo:** Que, el recurso de nulidad no constituye una instancia, de manera que esta Corte no puede ni debe revisar los hechos que conforman el conflicto jurídico de que se trata, siendo la apreciación y establecimiento de estos una facultad exclusiva y excluyente del o de los jueces que conocieron del respectivo juicio oral. Asimismo, a estos sentenciadores les está vedado realizar una valoración de las probanzas rendidas ante el Tribunal de Juicio Oral, lo que corresponde únicamente a aquel, el que para ello está dotado de plena libertad, con la sola limitación de no contrariar los principios de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, de lo que deberá dejar constancia al momento de fundamentar la sentencia, en términos tales que permitan reproducir el razonamiento del sentenciador y verificar el cumplimiento de los estándares legales.

**Octavo:** Que, Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, con la prueba rendida, tuvo por acreditados los hechos materia de la acusación del Ministerio Público, sin modificaciones, en los siguientes términos: *“El 21 de octubre de 2019, siendo aproximadamente las 20:30 horas, encontrándose vigente el estado de excepción constitucional y toque de queda decretado para ese día a las 20:00 horas, la víctima, el adolescente Benjamín Alonso Pinochet Ortiz de 16 años, se desplazaba por calle Walker Martínez a la altura de calle Alicahue de la comuna de La Florida, siendo abordado por funcionarios de seguridad municipal quienes en ese momento reciben información que el adolescente habría participado en un delito de robo, señalándole que se tirara al piso, para luego esposarlo, comunicándose en forma inmediata con carabineros*



quienes llegaron al lugar, siendo entregado el menor a los funcionarios públicos, Sargento 2° Alexis Contreras Ulloa y Cabo 1° Felipe Cifuentes Aburto.

*“Los funcionarios ya individualizados, encontrándose el adolescente bajo su custodia y privado de libertad, comienzan a exigirle que les señalara el lugar en que se encontraban los computadores robados, respondiendo la víctima que no sabía de qué hablaban, ante lo cual ambos carabineros comienzan a golpearlo reiteradamente con sus bastones de servicio, en distintas partes del cuerpo, especialmente en la zona de la espalda, piernas y cabeza, al tiempo que continuaban exigiéndole que les indicara que donde había dejado los computadores robados, mientras la víctima les gritaba pidiéndole que dejaran de golpearlo, manteniéndose esta agresión por un lapso superior a 5 minutos, siendo luego trasladado el adolescente a la unidad policial.” “A consecuencia de lo anterior la víctima Benjamín Pinochet Ortiz, resulta con lesiones visibles en la zona de la espalda, brazos, labio y muslos, siendo calificadas como leves, de acuerdo con lo informado por el Servicio Médico Legal, en su Informe N° 3576-2019 de fecha 28 de noviembre de 2019”.*

**Noveno:** Que, de la revisión de la sentencia es posible advertir que en el considerando séptimo, el tribunal señala que tratándose los apremios ilegítimos de una figura residual del delito de torturas, pues el inciso 1° del artículo 150 D del Código Penal dispone, en lo pertinente, que los hechos deberán calificarse de esta forma (apremios ilegítimos) cuando “no alcancen a constituir tortura”.

Posteriormente, el a quo hace un análisis de este tipo penal calificado, distinguiendo 4 elementos, a saber: 1) Un sujeto activo calificado: empleado público, 2) Abuso de cargo o funciones; aplicare, ordenare o consintiere en que se, 3) Inflijan intencionalmente dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos, sexuales o psíquicos, y d) Con el fin de obtener de ella o de un tercero información, declaración o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se le impute haber cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona, o en razón de una discriminación fundada en motivos tales como la ideología, la opinión política, la religión o creencias de la víctima; la nación, la raza, la etnia o el grupo social al que pertenezca; el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, la edad, la filiación, la apariencia personal, el estado de salud o la situación de discapacidad.

**Décimo:** Que, en el motivo décimo séptimo, al momento de calificar los hechos señala aquellos configuran el delito consumado de torturas cometidas por funcionario público, previsto y sancionado en el artículo 150 A del Código Penal; con la regla determinación de pena del artículo 150 C del mismo código; y en los cuales les ha correspondido participación a Felipe Andrés Cifuentes Aburto y a



Alexis Enrique Contreras Ulloa en calidad de autores, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 N° 1 del referido Código, porque tomaron parte de manera directa e inmediata en los hechos.

**Undécimo:** Que, llama la atención que el tribunal del fondo califique como delito de tortura los hechos acreditados, calificación que se reduce al hecho de que los acusados "infligieron intencionalmente a la víctima sufrimiento físico y moral" al golpearlo reiteradamente con sus bastones de servicio, en distintas partes del cuerpo, especialmente en la zona de la espalda, piernas y cabeza, al tiempo que continuaban exigiéndole que les indicara que donde había dejado las especies.

Sin hacerse cargo, en modo alguno, de la distinción entre el delito de torturas y su figura residual de los apremios ilegítimos, la que era igualmente compatible con el hecho de golpearlo reiteradamente con sus bastones, golpes que provocaron lesiones leves en la víctima.

Tampoco, se ha ahondado en las razones por las cuales se estima concurrente una "intención de infligir sufrimiento físico y moral" en los términos de tortura, ni de qué manera esa intención se diferencia de un ánimo de apremiar ilegítimamente.

**Duodécimo:** Que, por último, habiendo concluido que se había infligido intencionalmente a la víctima un dolor o sufrimiento físico grave, según se indica en el considerando décimo séptimo de la sentencia, no es posible comprender sobre qué bases los jueces de la instancia optaron por la figura de la tortura y no la de los apremios ilegítimos del artículo 150 D del Código Penal.

Efectivamente, el actuar de los imputados constituye un acto ilegal, lo cual está fuera de toda duda; sin embargo, el resultado de lesiones leves ocasionadas a la víctima, a juicio de esta Corte, se aparta del tipo penal que requiere la tortura, esto es, la intención de aplicar a la víctima un dolor o sufrimiento grave y permanente, sin aclarar cuales fueron los criterios adoptados para delimitar el ámbito de aplicación de ambos tipos penales.

**Décimo tercero:** Que, esta Corte es del parecer conforme lo razonado y de los hechos establecidos por el tribunal del grado, que la acción desplegada por cada uno de los acusados en su calidad de funcionario público, en ejercicio de su cargo, en contra de la persona que se encontraba bajo su custodia, configura el delito de apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, recogido en el artículo 150 D del Código Penal, y observando que el obrar de estos funcionarios fue ilegítimo, que hubo un abuso del cargo, pues no se observó la reglamentación para el uso de la fuerza que se aplicaron en los golpes a Benjamín Pinochet.



**Décimo cuarto:** Que, para sostener que el delito de autos se refiere al de apremios ilegítimos, del artículo 150 D del Código Penal, hemos aplicado la interpretación que respecto de esa disposición legal hacen los profesores Matus y Ramírez, en su Manual de Derecho Penal Chileno que expresa que *“para reducir la incertidumbre acerca del contenido típico de esta figura (apremios) , lo primero que debemos aclarar es que ella constituye algo más que las vejaciones injustas (art. 255) y la negativa de servicio (art. 256), pero menos que una tortura propiamente tal. La clave para su interpretación puede encontrarse en la falta de la intencionalidad específica de la tortura y su escasa entidad, que no alcanza a provocar los sentimientos de humillación y degradación en las víctimas ni haber sido doblegada su voluntad, propios de la tortura”*.

**Décimo quinto:** Que, por otra parte, solicita, se reconozcan las circunstancias atenuantes de los artículos 11 N° 6 del Código Penal, en atención a la ausencia de toda anotación prontuarial en el extracto de filiación de su representado. La circunstancia del artículo 11 N° 7, esto es, reparar con celo el mal causado, señalando que, en el juicio, a su parecer, no se probó el mal causado, no se probó un detrimento, por lo tanto, el intento de repararlo con depósitos a las víctimas debe ser considerado. La circunstancia del artículo 11 N° 9, colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, que debe valorarse a nivel jurisdiccional; ha quedado claro que su representado declaró en la investigación, en el sumario administrativo y en juicio oral, sus declaraciones sirvieron para esclarecer lo que ocurrió ese día.

**Décimo sexto:** Que, de lo expuesto en los motivos precedentes, no puede sino concluirse que la sentencia de autos, no satisface el estándar normativo previsto en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal. En efecto, tal como ya se ha indicado, la sentencia se ha dictado con infracción de ley que influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo

**Décimo séptimo:** Que, en consecuencia, concurren en el caso de autos los supuestos previstos en la causal contemplada en el artículo 373 letra b), del Código Procesal Penal, invocada como principal por el sentenciado Alexis Enrique Contreras Ulloa, que por lo demás, coincide en lo medular con el arbitrio intentado por el imputado Felipe Andrés Cifuentes Aburto, en su tercera causal subsidiaria.

**Décimo octavo:** Que, se omite pronunciamiento en relación a las causales principal y subsidiarias segunda, cuarta y quinta del recurso de nulidad interpuesto por el acusado Felipe Andrés Cifuentes Aburto, toda vez que sus argumentos son coincidentes con los del encartado Alexis Enrique Contreras Ulloa, que han sido debidamente considerados, y sus pretensiones se han visto igualmente satisfechas.





Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo dispuesto en los artículos 36, 297, 342 letra c), 360, 372, 373 letra b) y 384 del Código Procesal Penal, **SE ACOGEN** los recursos de nulidad interpuestos por el abogado Jorge Martínez Cornejo en representación del imputado Alexis Enrique Contreras Ulloa y por el abogado René González Nieto por el encartado Felipe Andrés Cifuentes Aburto, en contra de la sentencia definitiva dictada con fecha veintinueve de octubre de dos mil veintiuno por el Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, en los autos RIT 62-2021, RUC 1901143896-5, la que **SE INVALIDA Y SE DEJA SIN EFECTO Y SE LA REEMPLAZA POR LA SENTENCIA** que se dicta a continuación, en forma separada y sin nueva vista.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor Hernán Crisosto Greisse, quien estuvo por desestimar ambos recurso de nulidad en atención a los siguientes fundamentos:

Primero: Que la Ley 20968, introdujo en nuestra legislación una concepción amplia del delito de tortura, pudiendo ésta ser cometida por cualquier persona y no sólo por funcionarios públicos o por personas que sin ser funcionarios públicos ejerzan funciones públicas y deberá entenderse como tal todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación.

Segundo: Que a partir de los hechos asentados en la sentencia recurrida, es posible advertir en forma prístina que en el caso concurren un elemento decisorio para la litis, cual es que los golpes de que fue objeto la víctima tuvieron como propósito obtener del mismo una declaración o confesión, de manera que no estamos ante la figura simple de de apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, recogido en el artículo 150 D de nuestro Código Penal, sino que nos encontramos como acierta el fallo ante el delito de torturas que tipifica el artículo 150 A del referido Código

Tercero: Que, en efecto, al entender de este disidente, la sentencia en alzada se hacer cargo fundada e íntegramente sobre los argumentos de las defensas en orden a la calificación jurídica de esos hechos, esto es si correspondían a la subsunción de lo previsto en el art 150 A o al artículo 150 D, o lesiones leves, o alguna otra hipótesis prevista en el Código de Justicia Militar. Discurre que el delito de apremios ilegítimos es una figura residual de las torturas, ya que dispone el inciso 1° del art 150 D ya citado, en lo pertinente, que los hechos deberán calificarse de esta forma cuando “no alcancen a constituir tortura”.



Se describe acertadamente sobre cuáles son los elementos del tipo penal del artículo 150 A en relación con el artículo 150 letra C), analizándolos pormenorizadamente en los considerandos siguientes, y lo hace a juicio de este disidente, en forma certera, pues se apoya en cada una de las pruebas que indica, para dar por concurrente cada uno de estos elementos en el caso de autos

En especial cabe detenerse en el considerando decimo, donde establece cual fue el objeto de la golpiza, que no era otro que obtener de la víctima una declaración y una confesión en medio de un interrogatorio coetánea a que el detenido les fuere entregado,

Cuarto: Que de esta forma no puede sino compartir las conclusiones del considerando decimocuarto en el sentido de que quedó totalmente acreditado que Benjamín Alonso Pinochet Ortiz, al ser golpeado por los carabineros y al exigirle que respondiera las preguntas que ellos le dirigían que apuntaban a un delito y a una confesión, estaba bajo custodia y “resguardo” de ambos agentes del Estado, quienes lo recibieron de manos de los funcionarios de la municipalidad de La Florida, y que por ende tal como se manifiesta finalmente en el considerando decimoséptimo de la sentencia recurrida, los hechos que se dan por acertados constituyen el delito el delito consumado de torturas cometidas por funcionario público, previsto y sancionado en el artículo 150 A del Código Penal; con la regla determinación de pena del artículo 150 C del mismo Código, en los cuales les ha correspondido participación a Felipe Andrés Cifuentes Aburto y a Alexis Enrique Contreras Ulloa en calidad de autores, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 N° 1 del referido Código

**Regístrese y comuníquese.**

Redactó la abogado integrante Sra. Herrera Fuenzalida y del voto disidente su autor.

No firma el Ministro (s) señor Hidalgo, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por haber cesado sus funciones en esta Corte.

**Rol N° 5510-2021. Penal**

HERNAN ALEJANDRO CRISOSTO  
GREISSE  
MINISTRO  
Fecha: 07/03/2022 10:58:57

PAOLA ALICIA HERRERA  
FUENZALIDA  
ABOGADO  
Fecha: 07/03/2022 11:06:05



Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Hernan Alejandro Crisosto G. y Abogada Integrante Paola Herrera F. Santiago, siete de marzo de dos mil veintidós.

En Santiago, a siete de marzo de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



## II. Sentencia de reemplazo.

**Santiago, siete de marzo de dos mil veintidós.**

Con esta fecha se procede a dictar **sentencia** de reemplazo de conformidad a la ley.

### **Vistos:**

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus fundamentos décimo, undécimo, decimo tercero, decimo quinto y décimo séptimo, , que se eliminan.

### **Y teniendo, además, presente:**

1º) Que, del fallo de nulidad precedente, se reproducen sus fundamentos séptimo a décimo séptimo.

2º) De la determinación de pena. Que, en primer término, debe tenerse presente que la pena corporal asignada al delito de apremios ilegítimos, de acuerdo con el artículo 150 D del Código Penal, es la de presidio menor en su grado medio a máximo. Luego, el inciso segundo de la norma establece una regla especial de determinación de pena, para el caso en que la conducta se cometiere en contra de una persona que se encuentre bajo el cuidado, custodia o control del empleado público -que es la hipótesis acreditada en la especie- circunstancia en la cual se aumentara la pena en un grado.

El artículo 57 del Código Penal indica que, *“cada grado de una pena divisible, es una pena distinta”* y la regla especial citada impone el deber de aumentar la pena en “un grado”.

Luego, el aumento de pena establecido por el legislador en la norma en análisis, debe de interpretarse en el sentido de ampliar el marco penal de dos a tres grados, esto es, establecer una pena que va desde presidio menor en su grado medio hasta el presidio mayor en su grado mínimo. Interpretación que resulta más acorde con el principio pro reo, se cumple con el mandato legal y con la finalidad de la pena, en cuanto a la proporcionalidad de la misma.

En consecuencia, ante una pena que consta de dos o más grados, divisible, es aplicable la norma del artículo 68 del Código Penal. Así, concurriendo respecto



de los acusados **ALEXIS ENRIQUE CONTRERAS ULLOA** y a **FELIPE ANDRES CIFUENTES ABURTO** una circunstancia atenuante, a saber la del artículo 11 N° 6 del Código Penal, y ninguna agravante, el Tribunal no podrá imponer la pena en su máximo.

En la especie, los acusados tienen una irreprochable conducta anterior, lo que resulta de mayor significación, dado que sus edades superan los 35 años, sin que hayan sido objeto de reproche penal alguno de manera previa, es que se impondrá la pena en el grado inferior, esto es, el presidio menor en su grado medio, que va desde los 541 días a los 3 años. Dentro de ese tramo, en consideración a lo dispuesto en el artículo 69 del Código Penal, no habiéndose acreditado un mal que exceda la configuración del propio delito y con miras a cumplir con los fines preventivos especiales de la pena, es que se impondrá en el límite inferior del presidio menor en su grado medio.

3°) De la pena accesorio. Que las penas que se impondrán en la especie llevan consigo la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, conforme el artículo 30 del Código Penal, norma que es imperativa y que, conforme el principio de legalidad, no queda a criterio del sentenciador. De tal manera que la alegación de la defensa no resulta procedente.

No obstante, resulta plausible precisar que, en virtud de los fines de la Ley 18.216 y el principio pro reo, la suspensión de cargo u oficio público debe extenderse exclusivamente por los días correspondientes a la pena corporal que se impondrá en cada caso, no pudiendo abarcar la totalidad del periodo de observación de la pena sustitutiva a imponer.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 1, 7, 11 N° 6, 11 N° 9, 13, 14 N° 1, 15 N° 1, 18, 21, 24, 30, 50, 68, 69, 150 D, 255, todos del Código Penal; artículos 45, 46, 47, 295, 296, 297, 329, 333, 340, 341, 342, 343, 344, 346, 348 y 351 del Código Procesal Penal, Ley 18.216, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, se declara que:

**I.-se condena** a **ALEXIS ENRIQUE CONTRERAS ULLOA** y a **FELIPE ANDRES CIFUENTES ABURTO** como autores del delito consumado de **APREMIOS ILEGÍTIMOS**, previsto y sancionado en el inciso segundo del artículo



150 D del Código Penal, cometido el día 21 de octubre de 2019, en la comuna de La Florida, a una pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, más la pena accesoria de suspensión de cargo y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

II.- Que reuniendo los sentenciados, en la especie, los requisitos del artículo 4 de la Ley 18.216, se sustituye el cumplimiento de la pena corporal impuesta, por la pena de remisión condicional, consistente en la discreta observación y asistencia de los condenados ante la autoridad administrativa de Gendarmería de Chile, por el tiempo de 541 días, debiendo cada sentenciado dar cumplimiento a las condiciones impuestas en el artículo 5 de la citada ley.

Para dichos efectos el condenado deberán presentarse ante el Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile dentro del plazo de cinco días, contado desde que estuviere firme y ejecutoriada la presente sentencia. Si transcurrido el referido plazo no se presentare a cumplirla, dicho organismo informará al tribunal de tal situación y con el mérito de esta comunicación el juez podrá despachar inmediatamente una orden de detención.

Acordada con el voto en contra del Ministro Sr Crisosto quien con los fundamentos dados en la sentencia de nulidad, estuvo por rechazar íntegramente las causales de nulidad invocadas en ambos recursos de las defensas y por tanto no dictar sentencia de reemplazo manteniendo íntegramente la sentencia recurrida.

**Regístrese y comuníquese.**

Redactó la abogado integrante Sra. Herrera Fuenzalida y del voto disidente su autor.

No firma el Ministro (s) señor Hidalgo, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por haber cesado sus funciones en esta Corte.

**Rol N° 5510-2021. Penal**



HERNAN ALEJANDRO CRISOSTO  
GREISSE  
MINISTRO  
Fecha: 07/03/2022 10:58:59

PAOLA ALICIA HERRERA  
FUENZALIDA  
ABOGADO  
Fecha: 07/03/2022 11:06:10



Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Hernan Alejandro Crisosto G. y Abogada Integrante Paola Herrera F. Santiago, siete de marzo de dos mil veintidós.

En Santiago, a siete de marzo de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.  
A contar del 05 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>.